

Juventud, gobernabilidad y ciudadanía.
Aspectos de cultura política de los jóvenes de posguerra del área metropolitana de San Salvador

Mario Zetino Duarte y Larissa Brioso*

Resumen

Durante los últimos cuarenta años, hemos presenciado, en Centroamérica, procesos de cambios sociopolíticos internos, enmarcados en otros de carácter global, conducentes a la institucionalización democrática, y que han modificado las bases objetivas de la cultura política. Una primera generación de jóvenes de posconflicto en edades de 15 a 29 años ha enfrentado esos procesos sin haber experimentado los conflictos previos, pero sí muchas de sus consecuencias, que los han afectado de manera particular, entre ellas el agravamiento de la exclusión, la migración, el desempleo y subempleo, la violencia social y de pandillas. En el presente artículo, se abordan algunos elementos de cultura política que se han configurado en jóvenes urbanos de posguerra en El Salvador. En particular, algunos referidos a gobernabilidad y construcción de ciudadanía.

Palabras clave:

cultura política, derechos y obligaciones, ciudadanía, prácticas democráticas.

* Docentes e investigadores del Departamento de Psicología e investigadores asociados de FLACSO El Salvador. Los resultados que se presentan en el artículo son producto de una investigación que los autores realizaron para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa El Salvador, durante 2010. El texto completo del estudio puede leerse en el libro *Jóvenes urbanos. Cultura política y democracia de posconflicto en Centroamérica. El Salvador*.

Introducción

En el presente artículo, se exponen algunos elementos de cultura política de jóvenes urbanos de posguerra de El Salvador, que se obtuvieron como hallazgos en una investigación que los autores realizaron en el año 2010 para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa El Salvador. En el estudio, participaron jóvenes con edades entre 15 y 29 años, de los seis municipios más poblados del área metropolitana de San Salvador (AMSS): Apopa, Ciudad Delgado, Mejicanos, Santa Tecla, San Salvador y Soyapango. Los detalles metodológicos se exponen más adelante. Es oportuno, sin embargo, contextualizar los procesos globales y locales cuyos efectos en términos de cultura política, considerados en el estudio, adquieren particular importancia en la población abordada.

Los últimos treinta años del siglo pasado y la primera década del presente han sido de gran importancia para los procesos de cambios sociopolíticos conducentes a la institucionalización de la democracia en El Salvador y Centroamérica. Este periodo ha comprendido conflictos militares en la región, procesos de "posguerra" y esfuerzos de democratización con diferentes niveles de profundidad y éxito. Han implicado, también, la construcción de nuevos marcos legales e institucionales para propiciar nuevos discursos y diferentes formas de acción, con el propósito de evitar el retorno a los mecanismos de la guerra como solución a los problemas de acceso al poder y de respuesta a las necesidades económicas y sociales de la población. Dichos procesos no han respondido únicamente a dinámicas locales y regionales. Se han enmarcado en procesos de carácter global.

Ciertamente, América Central, al igual que todas las regiones del mundo, fue sometida a múltiples transformaciones económicas, orientadas a la liberalización de mercados y a otros procesos de ajuste macroeconómico que facilitasen su inserción en una economía globalizada.

Según Castells (2009), el concepto de globalización hace referencia al grado de amplitud o escala de comprensión del entrelazamiento de procesos, pero no en sentido estricto a las características del proceso específico que produce el entrelazamiento a escala global. Lo que se constituye en el proceso que produce el entrelazamiento de los procesos económicos, sociales, culturales y políticos a escala global es una revolución tecnológica informacional. Lo que distingue y diferencia, según Hall y Preston (1988), esta revolución tecnológica actual es el hecho de que el conocimiento y la información se aplican rápidamente en la generación de nuevo conocimiento.

Según Castells, desde inicios de la década de 1980, esa revolución ha sido central para la ejecución de procesos de reestructuración del sistema capitalista. Las economías del mundo se han vuelto más interdependientes entre sí, lo que ha conducido a nuevas relaciones entre economía, Estado y sociedad. Ello ha modificado, con adecuaciones particulares, relaciones tradicionales de poder al interior de algunos de sus ejes, así como de los componentes culturales de la sociedad en varias de sus áreas y, no menos, en la cultura política.

Por distintas vías, esos procesos han incidido en la esfera de la producción económica, en las formas y sistemas de comunicación y en la circulación de capitales bajo diversas formas. De esta manera, se han reestructurado a escalas globales y locales, las divisiones técnicas y sociales del trabajo combinadas con otros procesos económicos, sociales, culturales y políticos. Y como consecuencia de todo esto, se han reestructurado los mercados locales de trabajo y el acceso a este, por parte de los grupos sociales particulares, entre ellos los jóvenes, con efectos en la construcción de subjetividades de la población.

Según el sociólogo argentino Marcelo Urresti (s.f.), los elementos constituyentes de la revolución tecnológica informacional (RTI) disuelven las bases objetivas de la solidaridad

social. Y puede decirse que aquellos alteran y remodelan las bases objetivas de la construcción de las subjetividades individuales y colectivas —entre ellas las de la cultura política— y terminan, en consecuencia, por afectar el mundo de la política. Según este autor, cinco factores de poder de esas bases estructurales se han visto influenciados en su conformación recíproca, por supuesto, intermediados por la conjunción con otros procesos sociales o estrictamente políticos: el sector trabajo, el Estado, la nación, los regímenes políticos, los partidos y el capital.

El factor de poder de los trabajadores se debilita en su peso relativo, en organización, en capacidad de articulación e integración de intereses colectivos y de configuración de horizontes de orientación solidaria. La RTI ha hecho posible la flexibilización técnica de los sistemas productivos, así como la reorganización y relación entre puestos, responsabilidades de trabajo y procesos de producción. La lógica de la productividad tradicional —la repetición, lo más eficientemente posible, de un mismo procedimiento para alcanzar el mayor número de ejemplares de un mismo producto— se rompe. La producción se organiza entonces sobre la base de otros conceptos. Se flexibiliza la producción de productos y servicios, fragmentando su producción de acuerdo ya no a la lógica de la monopolización por la saturación del mercado, sino al control y garantía de venta de nichos de productos y servicios. Tendencialmente, se alteran los ritmos de producción, de contratación de mano de obra, a la que se exige la adaptación a formas flexibles de trabajo y a formas variadas de contratación.

Con características como las descritas, no es casual que crezca el desempleo, el subempleo y la exclusión social, con sus consecuencias exponenciales de que sea permanente. De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador 2007-2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el problema central del país en las últimas décadas no es tanto el desempleo, sino el

incremento del subempleo que se constituye en expresión de la lucha por excedentes en el mercado laboral.

El informe señala que, entre 1990 y 1995, la subutilización laboral descendió sensiblemente, llegando a tener una tasa de crecimiento negativa frente al incremento de empleos. Gracias a la reactivación de la inversión y el consumo después de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador alcanzó la segunda tasa más alta de crecimiento económico de América Latina. Sin embargo, de 1996 en adelante, la tendencia de la tasa de crecimiento económico disminuyó, al tiempo que la subutilización laboral comenzó a aumentar. Para los años 2007 y 2008, la tasa de subempleo para la población en edades de 15 a 24 años fue del 50 %, superando el nivel porcentual de los últimos cincuenta y ocho años para toda la población en edad laboral (49 % en 1950, 45 % en 1970, página 7 del informe). Y cuando el desempleo se convierte en una amenaza, tiene efectos disgregadores a nivel social. En el ámbito subjetivo y personal, afecta la disciplina del trabajador: lo vuelve temeroso, dócil, conservador y proclive a aceptar sin mayor protesta las condiciones de trabajo, tareas y remuneración, sabiendo que hay otros muchos dispuestos a hacerlo.

Otra característica señalada por Urresti es que los Estados han disminuido, en general, su capacidad para intervenir en importantes esferas de la sociedad, se han despojado de empresas a través de políticas de privatización, se han convertido en actores menores, debilitando su capacidad reguladora ante las presiones de intereses privados, locales y globales.

Con la llegada, en 1989, del partido ARENA al control del Órgano Ejecutivo en El Salvador, se inició un cambio importante en la política económica del país, orientada hacia tales fines, respondiendo al programa del Banco Mundial denominado de Ajuste Estructural (Lungo, 1990). Los periodos presidenciales de Alfredo Cristiani (1989-1994) y

Francisco Flores (1999-20049) tuvieron como componentes principales la privatización de empresas públicas y de otras actividades económicas, como la del café, del cual se eliminó el monopolio estatal de exportación; medida similar se adoptó con la comercialización internacional del azúcar al eliminarse el control del Estado en su exportación, la privatización de la importación del petróleo, la privatización de la banca y otras empresas y actividades bajo control estatal, como la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL); las distribuidoras de energía eléctrica; el sistema de entrega de placas de vehículos y licencias de conducir; y el sistema de pensiones, del que surgieron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se sumó la de las generadoras térmicas de la energía eléctrica y el arrendamiento de algunas áreas del único aeropuerto internacional. En ese mismo periodo, se produjo la dolarización de la economía salvadoreña, que condujo al Estado a la pérdida de su capacidad de emitir moneda y de establecer políticas monetarias. Dichas transformaciones, ocurridas algunas de ellas todavía durante la guerra y, otras posteriores a ella, suelen ser identificadas bajo el nombre genérico de “procesos de globalización”.

Urresti señala también que la capacidad de los partidos políticos de construir imaginarios y objetivos políticos integradores de atracción masiva se debilita, y sus contenidos ideológicos tienden a desdibujarse. La capacidad de respuestas políticas colectivas tiende a fragmentarse, atomizarse y debilitarse. Cuando existe interés por la participación política, los canales tradicionales se muestran incapaces de canalizarla y los focos de interés de los grupos sociales se fragmentan y focalizan en busca de identidades colectivas inmediatas, atomizando en torno a ellos sus capacidades de acción y participación política. Las respuestas políticas se orientan entonces a problemáticas puntuales, como movimientos por la defensa del derecho al agua, movimientos ambientalistas, movimientos de género, movimientos antiminería, etc.

En línea con el pensamiento de Urresti, sostenemos que suelen ser los jóvenes quienes se adaptan con más docilidad a estos cambios. Y esto se produce por varias vías: por inclusión, por exclusión, por fragmentación obligada de su mundo o reintegración deslocalizada del mismo. Lo anterior produce brechas no solamente intrageneracionales, sino intergeneracionales. Para las generaciones mayores, los jóvenes aparecen como extraños y viceversa.

Lo hasta aquí descrito brevemente no explica por sí solo la conformación de la cultura política, porque son condicionantes tendenciales generales, que adquieren especificidad en tiempo, grados, magnitudes y formas, de acuerdo a las particularidades estructurales y los procesos económicos, sociales y políticos particulares de la región y de cada uno de nuestros países.

Los procesos políticos que se han vivido en el país desde 1992, derivados de las reformas políticas surgidas de los Acuerdos de Paz, pueden quedar sujetos a interpretaciones diversas sobre el tipo de régimen político que se ha configurado en el país, por ejemplo, si se considera como un régimen híbrido (Morlino, 2008) o elitismo competitivo (Artiga, 2004). Lo cierto es que el proceso político salvadoreño puede caracterizarse, para efectos descriptivos, como una transición en el régimen político, entendido como el “conjunto de patrones que determinan las formas y canales de acceso al poder, los márgenes de acción ya estando en el poder y las características de los actores que son admitidos y excluidos de acceder al poder”, tal como lo señalan Guillermo O’Donell y Philippe Schmitter (1988). En ese sentido, los esfuerzos políticos que pueden fundar o fortalecer el camino a una institucionalidad democrática no tienen garantías de dar frutos; menos aún, cuando las estructuras de los poderes económicos y políticos, así como las configuraciones de las fuerzas que los forman, no han sufrido las modificaciones necesarias, especialmente cuando las dinámicas de reproducción del

capital, a escala local y global, fortalecen estas estructuras. Tampoco hay garantía de que la subjetividad social y política de la ciudadanía en general —y de los jóvenes en particular— se vaya configurando a tono con los procesos e impulsos de transición. Esto último es menos probable si las expectativas depositadas en cambios económicos, sociales y políticos se ven rápidamente frustradas.

Hablar de construcción de la institucionalidad democrática en El Salvador implica tener en cuenta el debate continuo del estado de la gobernabilidad. Sobre el significado de ambos conceptos, no hay unanimidad en términos de consideraciones teóricas y menos en cuanto a sus sentidos y las orientaciones prácticas en la realidad. Al igual que otros conceptos de la teoría política, el de gobernabilidad es objeto de diferentes enfoques teóricos. Ya que el propósito del artículo no es la discusión teórica, se remite para ello a literatura pertinente: Payne, Zovatto (2003), Briones y Ramos (1995); Kauffman (2003). Sin embargo, buena parte de las definiciones ponen en relevancia la eficiencia del sistema político —su capacidad de poner en marcha medidas políticas formuladas—, llegar a resultados deseados (eficacia), su efectividad —su capacidad de satisfacer funciones básicas y encontrar soluciones a problemas básicos—. De igual manera ponen en relevancia su capacidad de generar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad (legitimidad); su capacidad de involucrar, bajo formas variadas, a diversos sectores con capacidad de participación, y de mantener la funcionalidad del sistema a través de procedimientos democráticos (estabilidad). Cada uno de esos aspectos está sujeto a las consideraciones valorativas y evaluativas de carácter político de los miembros de la sociedad.

La política hace referencia a una dimensión amplia de vida societal: hace referencia a la relaciones de sus miembros con el Estado y a las relaciones de poder en el ámbito amplio del Estado, en el marco de los derechos y

responsabilidades. Comprende, por tanto, los elementos de la cultura política de todo el cuerpo social. Ya que el conocimiento de su propia situación define la postura de los hombres frente al poder, es importante comprender los reconocimientos y ejercicios de derechos y obligaciones, propios y de otros, que, en términos generales, son constitutivos de la ciudadanía.

Lipset (1987) destaca la importancia de los componentes sociales y psicosociales en la conformación de un sistema político democrático. Según Lipset, la estabilidad de cualquier democracia no depende solamente del desarrollo económico, sino también de lo que él denomina la eficacia, la efectividad y la legitimidad del sistema político. La primera se refiere al grado en el que el sistema es capaz de satisfacer las funciones básicas de la gestión gubernamental, tal y como la población y los grupos poderosos consideran que deben ser; es decir, se refiere a la capacidad de encontrar soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político, a lo que se suma la percepción de satisfacción de los ciudadanos.

Los procesos institucionales, socioeconómicos y políticos del país en las últimas décadas han agravado los procesos de exclusión social en toda la región, fortaleciendo las bases objetivas y subjetivas para el incremento de la migración intrarregional y hacia los Estados Unidos, para el incremento y reconfiguración de procesos como la violencia social, la delincuencia y el crimen organizado. Al menos una nueva generación de jóvenes, ahora en edades de 15 a 29 años, ha enfrentado estos nuevos procesos sin haber experimentado los conflictos previos, pero los ha colocado en el centro de sus consecuencias. Esa generación puede identificarse como la primera generación de posconflicto. Se han desarrollado en ellos nuevas expresiones de identidad cultural y de construcción de redes sociales, muchas de ellas virtuales, que tienden a descomponer los vínculos de las redes locales y a relocalizarlas virtualmente a nivel global.